

I Convenció Internacional sobre la Protecció de Dades en els Estats Plurinacionals i Federals (Palau del Parlament, 4 d'octubre de 2006)

Obertura

El president

Molt bon dia. Senyora directora de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, *señor director de la Agencia Española de Protección de Datos, madame la commissaire...*, de Protecció de Dades del Canadà, senyores i senyors, siguin benvingudes i benvinguts al Palau del Parlament, seu del poder legislatiu català, que avui es complau, i d'una manera molt especial, a acollir aquesta I Convenció Internacional sobre la Protecció de Dades en els Estats Plurinacionals i Federals, que té lloc en el marc d'aquesta III Trobada d'Agències Autonòmiques de Protecció de Dades.

Aquest acte d'inauguració consistirà en tres intervencions, i té la paraula en primer lloc l'il·lustríssim senyor José Luis Piñar, director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

El Sr. José Luis Piñar (director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades)

Moltes gràcies. *Buenos días, muy honorable president del Parlament de Catalunya, directora de la Agència Catalana de Protecció de Dades, colegas venidos de otras autoridades, amiga Jennifer Stoddart, del Canadá, directores de las agencias autonómicas de protección de datos del País Vasco y de Madrid, director de la Agencia Andorrana de Protección de Datos, queridos amigos y queridas amigas, es para mí un honor participar junto con el president del Parlament de Catalunya y la directora de la Agencia Catalana de Protección de Datos en este doble acto de inauguración de la I Convención Internacional sobre Protección de Datos y del III Encuentro de Agencias Autonómicas.*

La celebración de este evento en la sede del Parlament constituye una manifestación de la relevancia que este, como institución y como representación de los ciudadanos, concede al derecho fundamental a la protección de datos personales, cuyo objetivo no es otro que el de garantizar a todos los ciudadanos un poder de disposición y control sobre los datos que les conciernen. Gracias, por tanto, president, por su interés y por su amabilidad, y gracias a Esther Mitjans por su amable invitación para tomar parte en este solemne acto de inauguración.

Permítanme que dedique unos brevísimos minutos –para no alargarme y para entrar ya, por supuesto, en el seminario y dar la palabra a quienes me acompañan en esta mesa, y fundamentalmente al president del Parlament– a hacer algunas reflexiones acerca del importantísimo derecho fundamental a la protección de datos.

La celebración de la I Convención Internacional sobre la Protección de Datos en los Estados Plurinacionales y Federales, que tiene lugar con ocasión del III Encuentro de Agencias Autonómicas de Protección de Datos, ha venido a coincidir con un acontecimiento de enorme importancia, como es la reciente promulgación del nuevo Estatuto de Cataluña.

Desde luego no me corresponde a mí, como director, hacer una valoración propia sobre el Estatuto, pero todos nos congratulamos, todos nos alegramos, de que se haya aprobado un texto, el Estatuto de autonomía, de tanta importancia para Cataluña y para toda España. Pero quizá, en relación con el Estatuto, y acudiendo a opiniones manifestadas por quienes han intervenido en su elaboración, debate y aprobación, se pueden sacar algunas conclusiones.

En primer lugar, y eso es capital y afecta a la protección de datos personales, el Estatuto ha incrementado, ha ampliado significativamente, las cotas de autogobierno de Cataluña, y desde una perspectiva tanto cualitativa como cuantitativa, al atribuirle más y mejores competencias.

En segundo lugar –tal como digo también se desprende de las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios que participaron en la elaboración, debate y aprobación del texto–, hay que señalar que, comprometido con un proceso

constitucional de impulso de la descentralización política y el autogobierno, el actual modelo de estado quizá no responde en estos momentos a las notas que caracterizan a los estados plurinacionales o federales.

Sea como fuere, en este marco de ampliación del autogobierno de Cataluña el Estatuto incorpora la novedad de abordar específicamente la protección de los datos personales como derecho y como competencia ejecutiva de la Generalitat.

La regulación de esta materia ha tenido diversas vicisitudes, pero el texto aprobado, como antes comentaba, supone una ampliación de las competencias ejecutivas de la Generalitat respecto a las recogidas primero en la LORTAD y luego en la Ley Orgánica 15/1.999, e incluso también respecto a las recogidas en la Ley 5/2.002, de 19 de abril, del Parlament, por la que se crea la Agencia Catalana de Protección de Datos.

No voy a entrar, por supuesto, en el detalle del Estatuto. Hay para ello una ponencia que corre a cargo de la diputada Elisenda Malaret, que además, quiero resaltarlo, es miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos en representación del Congreso. Además, el texto del Estatuto y las competencias ampliadas que en materia de protección de datos asume la comunidad, asume Cataluña, son, yo creo, perfectamente congruentes con la doctrina del Tribunal Constitucional establecida en las sentencias 290 y 292, del año 2.000 ambas. Es lugar común citar ambas sentencias, pero son, sin duda, la pieza clave en la definición del contenido del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

En este marco de nuevas competencias, la colaboración entre agencias de protección de datos se constituye como una pieza clave del modelo diseñado por la Constitución y los estatutos de autonomía. Hasta este momento la experiencia de cooperación entre la Agencia Española y las agencias madrileña, catalana y vasca no puede sino calificarse como de excelente, tanto en lo que respecta a la participación de los directores autonómicos como miembros del Consejo Consultivo de la Agencia Española como en las relaciones bilaterales y multilaterales entre nuestras

respectivas instituciones a la hora de analizar problemas comunes y ofrecer soluciones dirigidas a la mejor protección del derecho de los ciudadanos.

La experiencia ya desarrollada entre nosotros servirá sin duda de base común para las futuras relaciones que puedan derivarse de la creación de nuevas autoridades autonómicas de protección de datos, que sin duda incorporarán nuevos elementos al marco de cooperación existente. Estoy convencido de que la experiencia acumulada nos permitirá buscar fórmulas apropiadas para facilitar el cumplimiento de la ley y sobretodo para garantizar adecuadamente y en condiciones de igualdad el derecho fundamental a la protección de los datos personales de los ciudadanos.

Dicho lo anterior, permítanme que dedique apenas dos minutos al tema capital a que se dedica uno de los bloques de este excepcional evento que ahora se abre: la creciente tensión entre las exigencias de seguridad y la garantía de las libertades y derechos fundamentales, en nuestro caso del derecho a la protección de datos.

En este punto quiero resaltar que la necesidad de dotar a los poderes públicos de nuevos instrumentos que permitan garantizar eficazmente la seguridad no debe suponer una merma en la garantía de la seguridad jurídica ni una limitación de los derechos fundamentales, premisa esta, por cierto, que no hace mucho compartía conmigo personalmente el secretario de estado de Seguridad.

La articulación de estos nuevos instrumentos está teniendo una incidencia particularmente intensa en la protección de los datos personales como consecuencia de nuevas exigencias en el tratamiento de la información. Sirvan como ejemplo la recientemente aprobada Directiva sobre retención de datos, la pretensión de aplicación extraterritorial de leyes antiterroristas respecto de la cesión y tratamiento de determinados datos de los pasajeros que viajen a los Estados Unidos de Norteamérica, la polémica suscitada por el llamado «caso Swift» con motivo de la comunicación de información financiera a los Estados Unidos, las cada vez más amplias obligaciones vinculadas a la represión del blanqueo de capitales y de la financiación de organizaciones terroristas o la generalización del tratamiento de datos biométricos y de la vigilancia por videocámaras.

Y todos estos ejemplos tienen algo en común. Pese a enmarcarse en la esfera de la cooperación entre estados con fines de salvaguarda de la seguridad pública, al mismo tiempo inciden directamente en los derechos y las libertades de los ciudadanos y afectan al mercado interior europeo.

Esta circunstancia nos lleva a poder afirmar que las competencias de la Unión Europea dejan de ser compartimentos estancos para interrelacionarse plenamente, planteando sin embargo problemas graves desde el punto de vista del proceso normativo, lo que en casos recientes ha supuesto incluso la intervención del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Este ha sido, por ejemplo, el caso de la transmisión de los llamados «datos PNR» a los Estados Unidos, cuya base legal fue anulada por el Tribunal de Justicia en mayo de este año precisamente por utilizar un instrumento jurídico comunitario en una materia excluida de este ámbito. Debo decir que, dado que dicha base legal ha dejado de tener valor desde el pasado día 1 de este mismo mes, debe aplicarse plenamente el marco normativo integrado por la Directiva 95/46 y las respectivas leyes nacionales de protección de datos, en la esperanza de que en breve pueda llegarse a un nuevo acuerdo entre Europa y los Estados Unidos que legitime la transferencia de datos de pasajeros a este país.

Al hilo de estos ejemplos es importante señalar que actualmente no contamos a nivel europeo con un sistema horizontal de protección de datos aplicable a los supuestos en que el tratamiento se realiza en el marco de la cooperación policial y judicial; tan solo contamos con sistemas sectoriales, que no permiten, sin embargo, abarcar todos los nuevos tratamientos de la información en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La propuesta de decisión marco sobre protección de datos en el tercer pilar, actualmente en tramitación, está llamada a llenar ese vacío.

La presencia en la Convención que ahora se inicia de los presidentes de las autoridades comunes de control de Schengen y Europol, del supervisor europeo de Protección de Datos y del adjunto al supervisor garantiza un debate equilibrado y profundo sobre estas cuestiones.

Pero los problemas relacionados con la seguridad y la protección de datos personales no se limitan al ámbito de su tratamiento por las autoridades públicas; afectan también, de una manera creciente, al sector privado. Por una parte, porque imponen a las entidades privadas nuevas obligaciones vinculadas al análisis y a la cesión de información a los poderes públicos para la concesión de los objetivos que antes he citado, y, por otra, por las propias exigencias de alcanzar mayores cotas de seguridad en su propia actividad interna, entre las que cabe citar los procedimientos de denuncia y auditoría impuestos por la Ley Sarbanes - Oxley, que también se pretende aplicar expresamente, o la responsabilidad social de las empresas y el buen gobierno corporativo.

Termino mi intervención, por último, con una disculpa. Lamento no poder participar íntegramente en el desarrollo de las actividades programadas, ya que coinciden con un compromiso previo de la Agencia Española de Protección de Datos que me obliga a viajar a Sarajevo dentro de apenas unas horas para intervenir en el desarrollo del proyecto de hermanamiento promovido por la Unión Europea para colaborar en la incorporación del acervo comunitario de protección de datos personales en Bosnia - Herzegovina.

Muchas gracias, señor president, muchas gracias, querida Esther, y mis mejores deseos de éxito en el desarrollo de los dos eventos que ahora comienzan.

(Aplaudiments.)

El president

Té la paraula seguidament la il·lustríssima senyora Esther Mitjans, directora de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

La Sra. Esther Mitjans (directora de l'Agència Catalana de Protecció de Dades)

Moltes gràcies. Molt honorable president del Parlament, il·lustríssim director de l'Agència Espanyola, *commissaire à la protection de la vie privée du Canada*, autoritats de control, col·legues, senyors i senyores, primer de tot vull agrair al president del Parlament l'ofertament d'aquesta seu per a aquesta Convenció. La

institució democràtica on es fan les lleis, seguint els principis de pluralisme i expressió de les minories, és un lloc adient, així com també el fa adient el fet que el nou Estatut d'autonomia vincula estretament l'autoritat de control de protecció de dades al Parlament.

Només voldria fer una reflexió amb relació, primer, a l'objecte d'aquesta Convenció pel que fa a la cooperació i la seguretat, i també voldria dir unes paraules sobre la complexitat del marc normatiu en el nostre estat autonòmic.

Ens centrem en organitzacions polítiques plurinacionals, supranacionals o federals, en què la cooperació és inherent. Això no obstant, la cooperació és un concepte jurídic indeterminat, com diem els juristes, i hi hem de donar continguts més concrets i útils.

Els beneficis de la cooperació són beneficis a llarg termini. De fet, la cooperació és una inversió de futur. La coordinació és la forma adequada per governar la complexitat. La coordinació és difícil i requereix esforç, preparació, però hi ha una expectativa de benefici comú que sorgirà de les accions integrades.

Però, a més a més, les situacions de risc, quan estan ben analitzades, pressionen cap a la cooperació i l'afavoreixen. Els desastres desafien l'autosuficiència dels sistemes, els límits, modifiquen les agendes personals, les prioritats i la mateixa articulació de l'interès públic.

Malauradament, ens trobem dins una dinàmica d'enfrontament que amenaça les llibertats i distorsiona els drets i els enfronta, quan en realitat són complementaris. En aquest context d'inseguretat, la cooperació és imprescindible, però també és més difícil d'assolir, perquè, en efecte, dintre de l'extrema complexitat de la societat internacional, des dels terribles atemptats s'ha dificultat la cooperació. L'exercici d'una hegemonia unilateral genera més violència. Si un país hegemònic només utilitza el seu poder militar en comptes del seu prestigi o influència, les polítiques que porta a terme són equivocades, a la llarga van en contra dels seus propis interessos. El poder hegemònic unilateral és vulnerable per la violència i la rancúnia que aixeca. No es pot negociar contra un poder que, de fet, moltes vegades no són ni tan sols

estats. No es pot negociar, en definitiva, perquè els grups que anomenem «terroristes» no tenen cap esperança d'obtenir beneficis del respecte de regles comunes. L'hegemonia unilateral contribueix a la inestabilitat.

En altres entorns internacionals, com els d'Europa i el Canadà, malgrat les seves dificultats d'integració, es treballa amb institucions multilaterals i amb concerts que maximitzen un interès propi més inclusiu. Ni nosaltres ni els nostres contrincants som homogenis, però nosaltres tenim més responsabilitat atesos els seus greus condicionants econòmics, socials i polítics. En aquest context, els estats i les organitzacions busquen tanta informació com sigui possible per reduir la incertesa. La informació i la seva transmissió són un recurs crucial. Les persones reals són contradictòries, desordenades. Les bases de dades reflecteixen imperfectament el món real. La seva interconnexió distorsiona encara més, i la irrealitat es pot tornar incontrolable.

Si la complexitat és inherent a l'entorn internacional, dins del nostre país, d'una manera diferent, també es dona una complexitat en el marc normatiu del dret de protecció de dades. És un marc normatiu complex i divers. D'una banda, s'ha hagut de fer front a l'absència de referències expressos al dret a la protecció de dades en la Constitució, i ha estat la Llei orgànica de protecció de dades, que ha esmentat el director de l'Agència Espanyola, la que ha hagut de fer la regulació del dret seguint la jurisprudència constitucional i atesa, naturalment, la normativa internacional: la Directiva i, de fet, l'experiència i les normes d'altres països del nostre entorn. Però això és una regulació que s'ha hagut de completar amb normes sectorials. Per tant, hi ha normes sectorials, tant estatals com autonòmiques, que han completat la regulació d'aquest dret i que han establert les particularitats que en alguns àmbits eren necessàries per atendre els interessos públics. També el Reglament ha estat important: l'establiment del règim jurídic de la seguretat ha estat fruit del desenvolupament de la potestat reglamentària.

Malgrat aquesta diversitat de regulacions, és evident que el nucli essencial del dret a la protecció de dades ha merescut una regulació orgànica en l'LOPD, que conté els

aspectes essencials que permeten reconèixer aquest dret. És a dir, el regula amb termes equivalents als previstos en la Directiva comunitària 95/46. És l'LOPD la que concreta els límits i les facultats que constitueixen el contingut essencial del dret fonamental definit per la jurisprudència, i ho fa en el mateix sentit que el Conveni europeu de drets humans.

Però, també com hem dit, no s'acaba aquí, la regulació, sinó que és el legislador sectorial qui, de fet, ha hagut de preveure les particularitats. La rellevància cada vegada més gran que suposa la utilització de la informació personal per al desenvolupament de les polítiques públiques ha comportat que les regulacions específiques del dret a la protecció de dades s'hagin resolt dins de l'àmbit sectorial concret en què s'han plantejat. Tenim normes sectorials, com he dit tant estatals com autonòmiques, en àmbits com el sanitari, la recerca, la hisenda o l'Administració electrònica. Aquestes decisions cal remetre-les al legislador, sectorial o general, estatal o autonòmic, però no deixar-les a l'àmbit de la potestat reglamentària o, fins i tot, de la decisió executiva, pel detriment que podria comportar per al dret fonamental.

D'altra banda, un altre element de complexitat el constitueix el fet que al nostre estat compost la funció de control en matèria de protecció de dades està distribuïda entre les autoritats de control estatal i les autonòmiques. Evidentment, el reconeixement complet del dret implica la garantia institucional, la previsió d'una autoritat de control. El legislador, novament, ha hagut de suplir l'absència constitucional, i és l'LOPD la que regula l'Agència Espanyola de Protecció de Dades com a institució de caràcter estatal que vetlla per la preservació del dret fonamental. Es reconeix també que les funcions d'aquesta institució, llevat del supòsit de les transferències internacionals de dades, poden ser exercides per autoritats de control en les comunitats autònomes quan afectin fitxers de les mateixes comunitats autònomes i de l'Administració local del seu territori. Així, a més de l'autoritat de control estatal, algunes comunitats autònomes han creat una autoritat de control. Fins ara tres tenen autoritat de control: la Comunitat de Madrid, la de Catalunya i la del País Basc, i avui som presents aquí els seus representats.

La distribució de competències entre les autoritats de control s'ha basat en la distinció de règims jurídics que fa l'LOPD entre fitxers de titularitat pública i fitxers de titularitat privada. En canvi, hi ha una regulació escassa pel que fa a les noves necessitats de coordinació i col·laboració. Amb aquesta regulació tan escassa es palesa un dèficit d'atenció en el model d'estat compost i l'afectació que això implica per al veritable reconeixement del dret fonamental a la protecció de dades.

Ara s'obre una oportunitat per reflexionar de nou sobre aquestes qüestions, sobretot a la llum del nou Estatut d'autonomia i dels anunciats canvis normatius estatals pel que fa al desenvolupament reglamentari de l'LOPD.

Així, aspectes com la distinció entre els fitxers públics de dades de caràcter personal i fitxers privats s'han analitzat sovint exclusivament des de la perspectiva de la seva distribució competencial. Això pot comportar una distorsió. D'una banda, perquè l'actual desenvolupament dels serveis públics, amb les seves formes d'organització i personificació, pot desvirtuar la garantia del dret a la protecció de dades, com es podria produir en els àmbits de la salut, l'ensenyament o els serveis socials. La tendència actual de desenvolupament del sector públic cap a formes juridicoprivades no hauria de desvirtuar les garanties ni suposar un canvi de la competència de l'autoritat de control.

També es pot arribar a disfuncions com les que actualment es donen en les corporacions de dret públic, que es veuen subjectes a ambdós règims jurídics, públic i privat, dins de la competència d'ambdues autoritats de control, segons quin sigui l'àmbit d'actuació.

En definitiva, amb les particularitats i els requeriments que estableix l'LOPD respecte als fitxers públics, el que vol és, en definitiva, contrarestar, equilibrar novament els poders exorbitants dels ens públics en el tractament de dades personals. Com s'han d'atendre interessos que són dignes de protecció, evidentment no es requereix consentiment per a la recollida, ni tampoc parlar de cessió de dades en determinades circumstàncies.

Bé, l'LOPD no té el rang d'orgànica en aquests aspectes. És una llei ordinària la que estableix el règim jurídic específic per als fitxers de titularitat pública i la que estableix el marc organitzatiu.

La llei catalana concreta per a Catalunya aquest esquema, però ha estat ampliat per les previsions contingudes en el vigent Estatut d'autonomia, com s'analitzarà posteriorment –ja ho ha mencionat el director– per la diputada Elisenda Malaret. L'Estatut reconeix el dret i, a més a més, defineix les competències de la Generalitat sobre aquest.

Les regulacions que han d'establir la coordinació són realment indispensables i s'haurien de preveure en una llei. L'LOPD conté una regulació escassa en la seva part no orgànica, de rang ordinari, que es podria completar, a la vista de les noves necessitats. Quasi no fa referència a aspectes relatius a la col·laboració i coordinació. El projecte de reglament sobre el desenvolupament del dret a la protecció de dades, que es tramita, com hem dit, conté referències sobre aquesta qüestió.

Es podria valorar potser la conveniència que sigui la llei de caràcter ordinari la que estableixi els principis de col·laboració i coordinació. Però també es podrien preveure fórmules que fessin efectiva la cooperació. Per exemple, el principi de proximitat: la possibilitat d'optimitzar els recursos de les autoritats de control de les comunitats, que, sense qüestionar la titularitat de la competència, permetessin una actuació en el territori. L'encàrrec de gestió o altres mecanismes podrien servir per actuar en els àmbits en què la concurrència d'ambdues autoritats fos especialment intensa, o bé en casos en què els procediments d'actuació són comuns.

S'haurien d'articular mecanismes de col·laboració –i ara acabo–, imprescindibles per assolir una actuació més compacta. És necessari disposar de canals d'informació, de seus, de fòrums, on poder debatre i adoptar decisions que afectin totes les autoritats, o bé de protocols, criteris comuns o recomanacions, i també organitzar reunions de treball i declaracions conjuntes, o coordinar-se en les relacions amb la Unió Europea i amb les autoritats de control d'altres països plurinacionals. En definitiva, es tracta de trobar continguts concrets al concepte de cooperació.

I permetin-me que per a la gent que només parla anglès digui que *the simplest cooperation is to share ideas, the simplest way of cooperation is to communicate. This is to start from the beginning. We have now the opportunity in those two days to have lively debates with your presentations. Complexity deserves it. Thank you.*

Gràcies.

(Aplaudiments.)

El president

Moltes gràcies. I, si m'ho permeten, unes breus paraules per tancar aquesta inauguració.

En política, com en tants àmbits de la vida, és fonamental la visió amb perspectiva ampla de les coses. És a dir, a l'hora d'encarar els reptes, els problemes, les noves demandes que sorgeixen de la nostra societat, ens cal no solament veure i conèixer el detall, sinó també veure i conèixer el marc en què s'inscriu.

Els darrers anys la globalització i la revolució de les noves tecnologies de la informació i la comunicació estan transformant radicalment el món, de dalt a baix: des de la feina de les grans administracions fins a la vida més quotidiana de les persones. Sense anar més lluny, i si m'ho permeten, aquest Parlament, per exemple, aquesta legislatura ha canviat físicament; hem intentat modernitzar-lo. De fet, si fan una volta pels passadissos, veuran que estem en obres. També és lògic, perquè estem en un període entre legislatures. Però el que és més important, més enllà de les obres, és que estem canviant els procediments interns, i sobretot estem descobrint i experimentant noves formes de relació amb la ciutadania. Per tant, ens adaptem a les noves realitats, i adaptar-se vol dir fer les reformes i els ajustos que calgui per poder aprofitar les noves oportunitats, per gestionar una realitat més complexa, però també alhora molt més rica, en el nostre cas més rica en democràcia, en gestió del temps, en gestió del coneixement i en gestió de la comunicació. En definitiva, intentem assolir més eficiència i més eficàcia en les moltes tasques que la nostra institució du a terme.

Faig aquesta reflexió perquè justament l'any 2002 vaig tenir l'honor de participar com a diputat d'aquest Parlament en l'elaboració i l'aprovació de la Llei de l'Agència Catalana de Protecció de Dades. La creació de l'Agència forma part del procés d'adaptació de Catalunya a les realitats emergents que acompanyen les noves tecnologies. Calia impulsar una institució que articulés un sistema de protecció, que ens aportés seguretat per seguir avançant en el camí obert per les noves tecnologies en la nostra societat.

Perquè el progrés necessita sempre camins paral·lels. El progrés tecnològic o el progrés econòmic han de comportar també un progrés social. No es pot avançar sense vetllar per la garantia dels drets, sense que en paral·lel es garanteixi la cohesió i la seguretat de les persones.

Avui les noves tecnologies continuen el seu procés d'expansió. Les transformacions són contínues, fet que obliga a una adaptació permanent. Tenim a favor que en el marc de la globalització es generen situacions similars arreu, amb diferències, amb matisos propis de cada ciutat, de cada nació, de cada estat, però amb elements comuns, també. Per això és important –i vull felicitar l'Agència per l'organització d'aquesta I Convenció Internacional– posar en comú diferents experiències, compartir situacions, veure quins problemes tenim, quines respostes donem amb institucions i amb administracions que dia a dia s'enfronten a noves complexitats i a noves realitats.

El món és cada cop més una gran xarxa de xarxes que ens ofereix l'oportunitat d'arribar més lluny i més ràpidament, de ser més àgils, de gestionar amb més eficàcia i amb més eficiència les noves realitats. Vostès hi tenen un paper clau, en aquesta gran xarxa, perquè amb la protecció, amb la seguretat, hi van aparellades la confiança i el progrés. Sense garanties la confiança es transforma en por, la seguretat en risc i el progrés en un avenç desorientat cap enlloc. Per això el seu paper és fonamental, perquè són garantia. Per això són fonamentals en el seu àmbit el rigor, la cooperació, la col·laboració i, sobretot, el principi de lleialtat institucional,

un principi de respecte que és de compliment imprescindible en la realitat actual, en què contínuament conflueixen administracions de diferent nivell.

Dels aspectes tècnics i segurament d'incidències polítiques més directes o indirectes en parlaran a bastament i amb molt més detall i coneixement tot seguit.

Només vull afegir, com a president del Parlament, que confio que d'aquesta trobada en treguin coneixements, conclusions i aspectes positius, no solament pel fet de ser-ne l'amfitrió, sinó pel fet de tenir plena consciència de la importància del seu paper en la nostra societat.

I, si els sembla, donem, doncs, per inaugurada aquesta I Convenció Internacional sobre la Protecció de Dades en els Estats Plurinacionals i Federals.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)